

La Semana Política

BN
MERC

20-7-80

Las Dos Caras de una Injerencia

La llegada a Chile del Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Robert Gelbard, se registró en los precisos días en que una pequeña tormenta se abatía sobre las relaciones entre ambos países, generada, curiosamente, por la ácida crítica que, antes de abandonar Santiago tras una breve visita, formuló el senador norteamericano Jesse Helms al embajador de su Gobierno, Harry Barnes.

Gelbard actuó con discreción y equilibrio, si bien no pudo ocultar la realidad de la visible injerencia que su país se siente autorizado para desplegar, al menos en cuanto se refiere a la determinación del destino político chileno. En su declaración final dijo haber sido "franco en expresar la posición del Gobierno de los Estados Unidos con respecto a la transición de Chile a un régimen democrático", si bien concedió que "la forma cómo

Chile logre un sistema democrático debe ser determinada por el pueblo de Chile".

Advirtió también que "en los meses venideros, el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos observarán los acontecimientos en Chile con gran interés". Pero suavizó la advertencia reiterando: "Comprendemos, sin embargo, que el destino de Chile es un asunto que deben decidir los chilenos".

Si bien la nutrida agenda presidencial imposibilitó una entrevista del enviado norteamericano con el Jefe del Estado, aquél sostuvo durante la semana conversaciones con ministros, miembros de la Junta de Gobierno, personeros preocupados de los derechos humanos y representantes de sectores políticos de un amplio espectro, que sólo excluyó a las posiciones extremas.

Pero el mensaje norteamericano, tan ex-

plicito para el Gobierno en el sentido de que debe avanzarse en "la creación de un ambiente de mayores libertades" para alcanzar la plena democracia "a través de los medios más rápidos y efectivos", no lo fue menos para los sectores opositores moderados: "Aquellos que otorgan legitimidad a los comunistas y a otros extremistas no están contribuyendo a un Chile estable y democrático".

Así, pues, si bien resulta difícil disimular la injerencia externa, al menos cabe reconocer que ella, esta vez, tendió a ser equilibrada, y que procuró influir razonablemente en el sentido de evitar que los chilenos, buscando una apresurada consagración de los ideales democráticos, terminemos cayendo —como otros países donde también se manifestó la impaciencia norteamericana— bajo el inamovible yugo totalitario.

El Sentido de una Advertencia

La oposición moderada ha debido, por tanto, comenzar a medir con mayor cuidado sus alianzas y sus andanzas políticas.

Porque las francas declaraciones del dirigente comunista y secretario general del Movimiento Democrático Popular, José Sanfuentes, publicadas el domingo último en nuestro diario, fueron, desde el punto de vista de los opositores democráticos, desafortunadamente coincidentes con la presencia del Subsecretario Gelbard en Chile.

Sanfuentes, con una franqueza que será preciso acreditar en el activo del comunismo local, confesó claramente el uso de la violencia política —cosa que, por otra parte, no po-

día menos de hacer, vistos los abundantes testimonios escritos de su partido al respecto— y, en forma no menos explícita, reveló la existencia de acuerdos y concertaciones con la DC y otras colectividades moderadas, en especial bajo el alero de la Asamblea de la Cívica, lamentando que la referida DC no se aviniera a reconocer públicamente la estrechez de los lazos existentes.

La fundación de la Asamblea había sido bienvenida por los políticos de centro-izquierda, quienes parecieron estimarla un instrumento aceptable para actuar de acuerdo con las fuerzas totalitarias contra el régimen, pero sin contaminarse con aquéllas. Sin embar-

go —según se desprendió de las declaraciones de Sanfuentes—, la concertación pareció avanzar más allá de lo que habrían deseado los elementos centristas, derivación inevitable, por lo demás, de toda alianza, sea pública o subrepticia, con el comunismo.

Afortunadamente, el jueves se dio a conocer una explícita declaración democratacristiana en el sentido de que la colectividad "no contempla ni alianzas ni acuerdos con el Partido Comunista". Decisión que, de ser llevada a la práctica, pone en difícil pie a la Asamblea de la Cívica, a la cual están integrados con ejemplar entusiasmo, precisamente, los elementos de extrema izquierda.

Otra Advertencia Llamativa

La semana fue políticamente muy activa, pero no como para apagar los ecos de los discursos presidenciales de la semana anterior, que, para algunos, insinuaban la permanencia del Gobierno militar durante 16 años.

El Secretario General de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, cuya colectividad se ha caracterizado por su adhesión al régimen —fidelidad que le ha valido algunos desaires políticos y eclesiásticos—, ha expresado claramente que su lealtad termina en el punto donde se pretenda que la "prolongación del régimen" implica ir contra las disposiciones expresas del texto constitucional. "Hay que tener muy claro —ha dicho Guzmán— que entre 1989 y 1990 culmina en Chile el régimen militar y se pasa a la democracia plena, con Congreso y todas las demás instituciones de la Carta Fundamental en

normal funcionamiento. Hay allí, entonces, un cambio de régimen institucional que la Constitución establece clarísimamente". Y ha dejado establecido que una cosa muy distinta a la anterior es la proyección de los principios y la obra fundamental del Gobierno actual, por los caminos plebiscitarios y electorales que contempla la Carta de 1980.

En los mismos momentos en que se conocía la declaración aludida, el propio Ministro del Interior formulaba, por su parte, alcances aclaratorios en igual sentido acerca de los discursos presidenciales del fin de semana anterior, reiterando que ellos ocurrían sobre la base de una plena observancia del texto constitucional vigente.

En igual dirección se pronunciaron los Comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea y el General Director de Cara-

bineros, el segundo de los cuales aludió a la posibilidad de que una modificación constitucional sustituyera el plebiscito presidencial previsto para 1989 por una elección con varios candidatos, idea que, habiendo partido de la oposición, ha sido recogida por diversos sectores civiles afines al Gobierno.

Junto con quedar, pues, suficiente y oficialmente clarificada la alusión a los "16 años de Gobierno", ha tenido lugar una saludable reafirmación del apego del propio Gobierno, a través del jefe político del Gabinete, del Poder Legislativo y de los jefes máximos uniformados que forman parte de él, a la letra y el espíritu de la Constitución de 1980, y una no menos saludable precisión de los límites que tiene la adhesión al régimen de sectores civiles de probada lealtad hacia los principios que lo sustentan y la obra que ha realizado.